



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010005115 DEL 10/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

**LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010 y en el artículo 16° del Decreto 416 de 2007,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16° del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) definir la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que mediante la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.709 el día 14 de mayo de 2010, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención para los fines del Decreto 416 de 2007 y periodicidad de las mismas.

Que en los artículos 3°, 4° y 6° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 se estableció el procedimiento para la expedición de la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado y se definieron los requisitos de información y documentación que el ente territorial debe acreditar para que esta superintendencia otorgue tal certificación.

Que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, asignó a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no de la cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de los entes territoriales que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias y en su artículo 8° le otorgó competencia para que decida sobre los recursos de reposición que se interpongan contra tales actos administrativos.

2. DE LA RESOLUCIÓN DE NO CERTIFICACIÓN

Que tal como lo establece el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010, las entidades territoriales debían enviar comunicación expresando su intención de ser certificados en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, acompañándola de la acreditación de la representación legal del solicitante y del poder correspondiente cuando se actuara a través de apoderado y reportar al SUI la información de que tratan los artículos 3° y 6° de la resolución en mención, antes del 30 de abril de cada año.



Que vencido el término para que el Municipio de TALAIGUA NUEVO del Departamento de BOLÍVAR, presentara la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010 y verificados los registros del archivo documental de esta Entidad, no se encontró manifestación de interés en ser certificado en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado y por tal razón se procedió a NO CERTIFICARLO mediante la Resolución No. SSPD 20164010024585 de 29 de julio del 2016.

La referida resolución fue notificada personalmente el 16 de septiembre de 2016 tal y como se observa en el expediente.

Mediante escritos de idéntico contenido radicados bajo los Nos. 20165290668062 y 20165290676862 del 30 de septiembre y 5 de octubre de 2016, respectivamente, el municipio interpuso oportunamente recurso de reposición contra la mentada resolución.

3. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO

El municipio presentó los siguientes argumentos:

1. *Que de conformidad con el art. 35 del CPACA, es deber de las autoridades informar el inicio de las actuaciones administrativas a los posibles afectados por la misma, para el ejercicio del derecho de defensa le asiste en virtud de lo consagrado en el art. 29 constitucional. Como se puede observar del contenido del acto administrativo Resolución SSPD-20164010024585 DE (sic) 2016-07-29, por ninguna parte se verifica una comunicación formal al ente territorial que presento (sic), del inicio de una actuación administrativa, que entre otras cosas, castiga al municipio para realizar coberturas mínimas en agua y alcantarillado.*
2. *Que la SSPD-20101300015115 DE (sic) 2010, es una disposición anterior a la expedición de la ley 1437 de 2011, por lo que su regulación tiene varios vacíos que contrarían mandatos superiores que regulan el procedimiento administrativo, y por supuesto, la expedición de actos administrativos. La mencionada resolución, no habla de la comunicación del inicio de una actuación administrativa, y de manera fulminante conmina a la producción de un acto administrativo con serias consecuencias adversas al ente territorial, sin recorrer el camino para la producción del mismo, en aras de salvaguardar el derecho de defensa como uno de los presupuestos fundamentales del debido proceso en las actuaciones administrativas, situación que si regula el nuevo código de procedimiento administrativo. Al municipio de Talaigua Nuevo, no se le comunicó, que hacia parte de las entidades territoriales beneficiarias de Regalías Directas y Compensaciones monetarias para la vigencia 2015 por parte de la superintendencia, esto con el fin de recordarle a la entidad los requisitos que deben cumplir para otorgársele la certificación y el tiempo en que deben presentarlos. La SSPD, no puede aplicar una norma de inferior jerarquía que vulnera el debido proceso y no contempla un procedimiento garantista para las entidades territoriales, que están colmadas de un sinnúmero de funciones que por momentos opacan los deberes a que están sujetas en el manejo de información. Siendo ello así, se debe propender por hacer eficaz el principio de coordinación entre las diferentes entidades del Estado de conformidad con el inciso 2° del art. 209 de la CP, el cual reza: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (sic). Con la no certificación, se afecta en gran manera el cometido estatal en la prestación de coberturas mínimas en agua y alcantarillado, situación que se traduce en la no destinación de estos recursos a poblaciones vulnerables, que en definitiva, son las afectadas.*
3. *Como quiera que la Resolución SSPD-2064010024585 (sic) DE (sic) 2016-07-29 se puede asimilar a una sanción por las consecuencias consagradas en el Parágrafo 2° del art. 6 (sic) de la RESOLUCIÓN SSPD -2010300015115 DE 2010, el cual señala que la No Certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado tiene como única consecuencia el no permitir a la entidad territorial respectiva, el cambio de la destinación de sus recursos de Regalías directas y compensaciones monetarias, con mucha más razón, debe garantizarse el debido proceso, esto es, comunicarles a las entidades territoriales dentro de un término razonable, su compromiso de suministrar la información y solicitar la certificación dentro del plazo respectivo, antes proferir una decisión definitiva al respecto.*

Con base en los argumentos anteriores, se solicita a la SSPD, dejar sin efecto la resolución SSPD-2064010024585 (sic) DE (sic) 2016-07-29 e inaplicar (sic) el procedimiento consagrado en la

RESOLUCIÓN SSPD -20101300015115 DE 2010, por contrariar el art. 35 de la ley 1437 de 2011 y el art. 29 de la CP

ADEMÁS, realizar las actuaciones administrativas para el proceso de certificaciones conforme al procedimiento vigente contenido en el CPACA."

4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Ahora bien, para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Coordinación procederá a analizar el único argumento expuesto, de la siguiente manera:

4.1. Del argumento relacionado con la presunta Violación al Debido Proceso.

Señala el ente territorial que en este proceso de certificación de coberturas mínimas, la SSPD violó el debido proceso, toda vez que no observó las formalidades establecidas en el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que en su concepto, no se expidió auto de apertura del proceso administrativo y su correspondiente notificación al municipio para que este ejerciera su derecho de defensa y contradicción. Que adicionalmente la Resolución No. SSPD 20101300015115, del 5 de mayo de 2010 no se encuentra ajustada a la Ley 1437 de 2011, violando así el principio al Debido Proceso.

Con relación al argumento en comento se debe recordar que el proceso de certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, se rige por lo dispuesto en la Resolución 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, que definió la metodología a observarse por parte de los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Por consiguiente, el acto administrativo de no certificación se expide no sólo para los municipios que manifestando su interés en obtenerla no cumplan con las exigencias normativas para el efecto, **sino también para todos aquellos que siendo beneficiarios de regalías y compensaciones monetarias no hayan manifestado interés en conseguirla, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 6 de la resolución en mención**, que señala:

"Parágrafo 1°. Se entenderá que la entidad territorial que no presente la solicitud mencionada en el artículo 4° de la presente resolución, dentro de los plazos establecidos, no está interesada en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, y por lo tanto, mediante acto administrativo motivado, la Superintendencia NO CERTIFICARÁ al respectivo ente territorial".

En efecto, el acto administrativo objeto de recurso de reposición bajo estudio, da aplicación a tal disposición toda vez que de una parte, el Municipio de Talaigua Nuevo – Bolívar fue relacionado como beneficiario de regalías directas y compensaciones monetarias en el radicado No. SSPD 20165290123362 y 20168100075612 del 1 de marzo de los corrientes, remitido a esta Entidad por la Agencia Nacional de Minería y de otra, **en atención a que el ente territorial no presentó a 30 de abril del 2016**, la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010.

En este entendido, es claro que el ente territorial fue NO CERTIFICADO toda vez que NO manifestó su interés de obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado antes del 30 de abril de 2016, sin que sea necesario evaluar el cumplimiento del ente territorial a las demás exigencias establecidas en la norma.

Sobre el particular es preciso mencionar, que los plazos constituyen una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*.

La Corte Constitucional se ha pronunciado así al respecto¹ en los siguientes términos:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso".

En este entendido es claro que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 4° de la Resolución No. 20101300015115 de 2010 sin solicitar la certificación objeto de estudio, la única decisión viable que podía tomar esta Superintendencia consistía en no certificar al ente territorial.

Ahora bien, la resolución mencionada, fija los requisitos que requieren cumplir los municipios y departamentos para obtener la Certificación de Coberturas Mínimas de que hablan la Ley 141 de 1994, el Decreto 416 de 2007, la Ley 1283 de 2009 y el Decreto 1447 de 2010.

En este orden de ideas, es claro que el procedimiento establecido en las normas mencionadas se ha publicado debidamente y en consecuencia es deber del municipio conocerlo y acatarlo, y de esta forma, si deseaba ser certificado, debió presentar la respectiva solicitud para tales efectos, sin que sea válido el excusarse en la ignorancia de la norma, toda vez que es claro que el Artículo 9° del Código Civil, establece que *"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa"* así como del artículo 56 de la Ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político) que en idéntico sentido *ad litteram* establece que *"(...) No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla (...)".*

Por otra parte, contrario a lo manifestado por el ente territorial, mediante oficio SSPD No. 20164010082441 del 11 de febrero de 2016, esta Coordinación le informó al alcalde de Talaigua Nuevo, las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al proceso de certificación de coberturas mínimas, así como los requisitos a cumplir para tal proceso, además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la PGN en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008. Es decir, al ente territorial se le comunicó oportunamente de manera clara el procedimiento y los requisitos para obtener la certificación en mención.

Así mismo, el auto de apertura del proceso de Coberturas Mínimas para la vigencia 2015, número SSPD 20164010012736, fue comunicado al municipio con oficio No. SSPD 20164010392751 del 13 de julio de 2016.

De otra parte, esta entidad le brindó la oportunidad al municipio de ser oído antes de la firmeza de la decisión, derecho que ejerció el municipio mediante el recurso interpuesto mediante las comunicaciones Nos. 20165290676862 y 20165290668062.

Con base en el análisis expuesto, se advierte que no hubo violación al derecho de defensa del municipio de Talaigua Nuevo, toda vez que el proceso de certificación en coberturas mínimas para la vigencia 2015, fue puesto en conocimiento del ente territorial, comunicando y notificando a los interesados las decisiones que se adoptaron, con el objeto que pudieran controvertirlas, garantizando así el debido proceso.

4.2. Aclaraciones del proceso de certificación en coberturas mínimas.

En cuanto a lo manifestado por el ente territorial en su recurso, esta Superintendencia aclara lo siguiente:

¹ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

En primer lugar, el proceso de certificación en coberturas mínimas no es una sanción. Su propósito, como fue desarrollado en la Ley 141 de 1994, la Ley 1151 de 2007, el Decreto 416 de 2007, la Ley 1283 de 2009 y el Decreto 1447 de 2010, es que los municipios que cumplan con los requisitos de coberturas mínimas, puedan cambiar el la destinación obligatoria de las regalías y compensaciones directas destinados al aumento de la cobertura en agua potable y saneamiento básico, en otros proyectos, como lo determina al parágrafo del artículo 120 de la Ley 1151 de 2007. El municipio no certificado, continúa recibiendo ese dinero, y tiene que destinarlo a dichas actividades. Por lo que no se entiende lo mencionado en el recurso por el municipio "que la No Certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado tiene como única consecuencia el no permitir a la entidad territorial respectiva, el cambio de la destinación de sus recursos de Regalías directas y compensaciones monetarias, con mucha más razón, debe garantizarse el debido proceso, esto es, comunicarles a las entidades territoriales dentro de un término razonable, su compromiso de suministrar la información y solicitar la certificación dentro del plazo respectivo, antes proferir una decisión definitiva al respecto".

Finalmente, esta Superintendencia no tiene competencia para recordarle al ente territorial que recibe regalías y compensaciones directas, máxime cuando ello es de conocimiento del municipio quien es el receptor de las mismas. Tal como se encuentra explícitamente desarrollado en la resolución, quien le informa a la Superintendencia quienes han recibido para iniciar el proceso de certificación en coberturas mínimas son la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es por ello responsabilidad del mismo municipio gestionar e identificar el destino de los dineros que recibe, y cumplir con su obligación constitucional de ser el garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia (art. 367).

De acuerdo con el análisis precedente está comprobado que el Municipio de Talaigua Nuevo del Departamento de Bolívar, no cumplió con el requisito de la solicitud señalada en el artículo 4° y la actualización establecida en el parágrafo 3 del artículo 6° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010.

Así las cosas, no se accederá a revocar la resolución objeto de recurso, la cual en consecuencia será confirmada.

Por lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

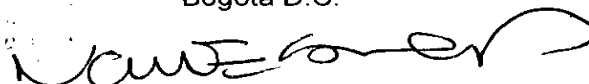
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010024585 de 29 de julio del 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente la presente resolución al Municipio de TALAIGUA NUEVO del Departamento de BOLÍVAR, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 69 del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUESE el contenido de la presente resolución al Departamento Nacional de Planeación - DNP.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Bogotá D.C.



MARIA EUGENIA SIERRA BOTERO
Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información